



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

Expte n°: 928/2022 AML

Autos: “ALMAGRO CONSTRUCCIONES S.A. c/ ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Sentencia Definitiva del Expte. N° 928/2022

Buenos Aires,

AUTOS Y VISTOS

I.- Surge de autos que mediante la Resolución N ° 2021-1735-E-AFIP-DEIMPR#SDGTLSS, la Administración Federal de Ingresos Públicos resolvió no hacer lugar al recurso de revisión presentado por la contribuyente ALMAGRO CONSTRUCCIONES S.A., contra la Resolución N° 245/19 ratificando deuda y multa confirmadas por la misma, en los términos expuestos en el dictamen que le antecede.

II.- Contra ello, la apelante, interpuso recurso de apelación, dentro del plazo prescripto por la legislación aplicable en la materia.

Asimismo se le notificó lo resuelto y se le comunicó que la resolución era susceptible de ser recurrida ante esta Alzada, debiendo depositar dentro de los plazos correspondientes el importe resultante de la resolución administrativa (art 15 de la ley 18.820 y art. 39 bis del decreto ley 1285/58 modificada por ley 24.463. Interpone la parte actora recurso de apelación.

Por Nota N° 25/22, la Administración Federal de Ingresos Públicos, informa que **la contribuyente cumplió con el pago del depósito previo**, a los fines de la apertura de la instancia judicial, elevándose las actuaciones a esta Excm. Cámara Federal de la Seguridad Social, para su intervención, motivo por el cual corresponde la apertura del recurso.

III.- La recurrente se agravia, en tanto considera que la inspección actuante determina deuda sin dejar constancia alguna en las actas de inspección de la documentación cotejada o cualquier otra prueba que haya motivado su determinación. Afirma que no existió personal bajo relación de dependencia que no se haya encontrado debidamente registrado. Particularmente hace referencia al proceso “Longo, Alejandra Viviana c/ Almagro Construcciones S.A y Otro s/ Despido”, por el que se estableció que la actora mantuvo relación laboral con la firma en el período comprendido entre el 1/03/95 al 24/01/2011. Aclara que la Sra. Longo a partir del 2002 comenzó a integrar el Directorio de la sociedad, optando por la aplicación de las normas concernientes a trabajadores autónomos. Considera que el organismo se encuentra reclamando aportes y contribuciones de la seguridad social, incluyendo períodos que se encuentran prescriptos, como así también las correspondientes sanciones. Plantea la nulidad por



vicios insubsanables en el acta determinativa de deuda, considerando que la misma no reúne los requisitos del art. 7 de la ley 19.549. Expresa que falta ponderación de la prueba ofrecida en sede administrativa, toda vez que el organismo fiscal habría ignorado prueba documental.

IV.- Previo a resolver la cuestión de fondo, corresponde señalar que con relación al planteo que las actas recurridas carecen de los requisitos propios del acto administrativo, es dable destacar que conforme Juan Gilibert, en “ El Derecho a la legítima defensa en el sistema jubilatorio argentino” (L.T, pág. 385/6), las diligencias que se cumplen con la intervención de los funcionarios competentes y se instrumentan a través de las actas de verificación, que se notifican al interpelado, no reúnen los requisitos esenciales ni generales de un acto administrativo y ello por cuanto no ha mediado una decisión fundada que cause estado, pues hasta tanto no se haya agotado el procedimiento regulado por la ley 18.820 y que da lugar a la ejecución, no es un acto administrativo definitivo, contando el obligado con los medios legales apropiados para demostrar la improcedencia del débito intimado. Es sólo la conformidad del contribuyente, mediante la no impugnación de las actas, lo que permite al fisco proceder a su cobro, y si, por el contrario, se muestra disconforme con la deuda o infracción, la ley 18.820 pone a su alcance el procedimiento recursivo adecuado para fundamentar sus agravios. Sólo después de una decisión fundada, acto administrativo definitivo, contraria a la pretensión del recurrente, se habilitará a la ejecución fiscal, siempre y cuando no medie apelación ante la Excm. Cámara Federal de Seguridad Social, pues entonces deberá esperarse una sentencia favorable de ésta a los intereses fiscales.

Como consecuencia lógica de lo expuesto, cabe concluir que las actas de inspección e infracción no son más que una constatación que hace la Administración de la situación del contribuyente, por lo que no cabe exigir de las mismas los requisitos propios de los actos administrativos, como tampoco que sean realizadas por juez administrativo, ya que por tratarse de constataciones las mismas pueden ser cuestionadas- tanto la deuda como la multa- y dar nacimiento posteriormente al proceso que nos ocupa. Por todo lo expuesto, corresponde la desestimación del agravio esgrimido por el apelante en este sentido.

V.- Entrando a considerar la cuestión de fondo, cabe señalar que las presentes actuaciones tienen su origen en la denuncia realizada por la Sra. Alejandra Viviana Longo, en la que informó haber trabajado para la firma –aquí apelante-, como empleada jerárquica entre marzo de 1995 y enero de 2011; sustentando ello en la sentencia laboral del Juzgado Nacional del Trabajo N° 24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictada en los autos caratulados “Longo, Alejandro Viviana c/ Almagro Construcción S.A y otro s/ Despido” (Expte N° 9344/2011) y su aclaratoria de fecha 15 de mayo de 2013.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

La misma ha quedado firme y consentida ya que si bien fue apelada, no lo fue en cuanto al punto sino en materia de honorarios, habiendo sido resuelto por sentencia de fecha 20 de septiembre de 2017, por la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Sentado ello, en el decisorio se resolvió hacer lugar a la demanda interpuesta condenando solidariamente a ALMAGRO CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA, señores Silvina Gonzalez Wirth, Oscar Mario González, Patricia González Wirth y María del Carmen Villarroel Francke éstos en su calidad de herederos del codemandado señor Urbano González a abonar a la señora Alejandra Viviana Longo, dentro del plazo de cinco días de aprobada la liquidación prevista en el art. 132 de la ley 18.345 mediante depósito judicial en autos, la suma de pesos cuatrocientos veinticinco mil trescientos ochenta y cuatro con cuarenta y tres centavos (\$ 425.384,43), más los intereses. Asimismo, se condenó a la demandada Almagro Construcciones S.A. a hacer entrega a la actora, dentro de igual plazo, del certificado de trabajo, bajo apercibimiento de astreintes. Impuso las costas a las demandadas en forma solidaria y reguló honorarios.

Particularmente lo que se discute en autos es la deuda intimada, correspondiente a los períodos 03/2000 a 03/2002 –en concepto de empleada no declarado- y 04/2002 a 01/2011-diferencia de remuneración-, sustentada en la relación de dependencia de la Sra. Longo.

Ello así el procedimiento administrativo se inició mediante el Acta de Inspección e Infracción N ° 0173013130101, mediante la cual se intimó por deuda en concepto de empleada no declarada como así también por diferencia en las remuneraciones, por los períodos antedichos, que fuera notificada el día 8 de abril de 2019 (ver Actuación Nro: 16962-99-2019/1).

Debe dejarse sentado que los temas relativos al vínculo laboral, períodos trabajados y remuneración quedan al margen de la cuestión en tanto rige el principio de la cosa juzgada, en virtud del cual debe considerarse que ha quedado firme respecto del reclamante, la materialidad de los hechos comprobados en sede laboral –en donde se debió ofrecer la prueba pertinente-, y circunstanciados en las sentencias que se acompañan.

Ello así, en tanto la “Cosa Juzgada” resulta ser “un impedimento jurídico que prohíbe volver a juzgar una cuestión ya resuelta por los tribunales de justicia, entre las partes a quienes la sentencia puede serle opuesta (Fassi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Astrea, TºI -606 cit. Conforme Giuliani Fonrouge, Carlos y Navarrine Susana –Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social, Ed. Depalma 2001, página 725).



Sentado ello, entrando a la cuestión a decidir –dado que no se cuestiona que resulte de aplicación la prescripción decenal-, corresponde resolver desde qué fecha corresponde declarar prescriptos o no los períodos reclamados en autos.

Ello así, la prescripción liberatoria es, concreta y sintéticamente, la extinción de las acciones derivadas de un derecho por su abandono por el titular durante el término fijado por la ley. El art. 16 de la ley 14.236 dispone en su primer párrafo que “Las acciones por cobro de contribuciones, aportes, multas y demás obligaciones emergentes de las leyes de previsión social prescribirán a los 10 años”, por lo que es dable destacar que con la prescripción lo que se da por extinguido es la acción con que se cuenta para reclamar un derecho.

También, corresponde señalar que la aplicación del artículo 2532 del Código Civil y Comercial al caso de autos no resulta procedente toda vez que el procedimiento por deudas perseguidas en concepto de aportes y contribuciones por parte de AFIP posee una legislación específica –ley 14.236-.

Ahora bien, tampoco resulta aplicable el art. 2550 del CCC, ya que tampoco se observa en autos que el fisco haya probado o invocado una situación de dificultad o imposibilidad de hecho que la hubiese impedido temporalmente de ejercer la acción correspondiente.

Sobre el punto resulta clarificador lo expresado por el Dr. Jorge Joaquín Llambías en su Tratado de Derecho Civil - Obligaciones (Tomo III, 3era edición actualizada, Ed. A. Perrot, pág. 357) al manifestar “... El comienzo de la prescripción es independiente del conocimiento que tenga el titular de la existencia de su derecho...”.

A mayor abundamiento, se hace oportuno señalar que el instituto de la prescripción liberatoria presenta como finalidad última tutelar uno de los elementos que se presentan como indispensables para el sostenimiento de cualquier sociedad, la seguridad jurídica y consiguientemente la paz social.

Ahora bien, existen casos que la legislación ha querido preservar de los efectos de la prescripción, y estos, por ser excepciones a la regla, se encuentran taxativamente establecidos, entre los cuales no se halla la cuestión que nos ocupa.

En sentido análogo se ha expresado esta sala en las causas “Clorox Argentina S.A. c/AFIP-DGI s/Impugnación de Deuda”, Expte. 14.956/06, S.D.120.013 del 24/11/06, y en “Oficina Comercial de la Embajada de la Rep. de Corea c/ AFIP-DGI s/Imp. De Deuda”, Expte. 1650/06, S.D. 120.021 del 27/11/2006; así como la Sala III en los autos “Maitor S.R.L. c/Dirección Gral. Impositiva”, S.D. 111.693 del 20/02/06, por el voto de la mayoría).

A mayor abundamiento, y no encuadrándose el caso de autos en ninguno de los supuestos que taxativamente el legislador ha querido preservar de los efectos de la prescripción (vgrs. Art. 2536 C.C.) no corresponde justificar judicialmente la liberación de la AFIP, de las consecuencias de aquella.

Ello así por cuanto el organismo fiscal tiene amplias facultades de verificación,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1
control y formulación de cargos (art. 35 de la ley 11.683 y ctes), respecto del reclamo que ahora persigue, con prescindencia de la causa judicial que promoviera el trabajador.

A mayor abundamiento corresponde resaltar que, si bien el art. 2550 del C.C. dispone una suerte de suspensión de los términos prescriptivos, refiere a situaciones en las que desde el punto de vista fáctico el acreedor se ve imposibilitado de reclamar su derecho. Esta imposibilidad de obrar debe ser apreciada, concretamente, en relación con la persona del demandante.

Y en el caso de autos, no se encuentra configurada situación alguna que permita afirmar que la AFIP se vio impedida de ejercer aquellas facultades.

En sentido análogo se ha expedido la Sala III de esta Excma Cámara Federal de la Seguridad Social, in re “Maitor SRL c/ Dirección General Impositiva”, sentencia definitiva 111.693 del 20/02/2006 (rev. LL del 19/04/06), por el voto de la mayoría, posición ésta ya discernida con anterioridad por el Dr. Fasciolo, en disidencia, en la causa “Editorial Perfil c/ AFIP-DGI s/ Impugnación de deuda, sentencia 109.259 del 9/08/05.

Por consiguiente, cabe admitir la prescripción liberatoria en los términos del art. 16 de la ley 14.236, respecto de los créditos devengados con anterioridad a los 10 años previos al reclamo de la rubrada, esto es 8/04/2019 (fecha de notificación de las Actas de Inspección e Infracción), dejando sin efecto la resolución recurrida, de acuerdo a lo expresado precedentemente.

VI) Respecto a los períodos no prescriptos, en los que se reclama deuda por diferencia de remuneración, sustentada en la relación de dependencia reconocida por sentencia judicial, corresponde desestimar el planteo de la parte actora cimentado en que la actora comenzó a integrar el directorio de la sociedad optando por la aplicación de las normas concernientes a trabajadores autónomos, toda vez que ha mediado resolución judicial la que ha adquirido carácter de cosa juzgada. Ello así, en cuanto resolviera que “...el señor perito contador en anexo A, detalla remuneraciones abonadas a la actora, inscripta en el libro art. 52 de la ley de contrato de trabajo, y surge demostrado que a la señora Longo se le abonaba un sueldo mensual, más la incidencia por antigüedad, a cuenta de futuros aumentos, Dto. 2005/04, vacaciones sueldo anual complementario, descuento por días de ausencia, conceptos evidentemente remunerativos y a través de los mismos se retribuía las tareas administrativas que se tienen por acreditadas cumplía la actora”.

Por lo expuesto, corresponde desestimar el planteo de la parte actora.

VII.- En atención a que la AFIP no es equiparable con las partes en las contiendas judiciales comunes, sino que actúa oportunamente en defensa del interés general, las costas se imponen en el orden causado (cfr. art. 68 del CPCCN).



La Dra. Viviana Piñeiro no vota en virtud de hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN).

Por ello, este TRIBUNAL RESUELVE: 1) Declarar formalmente admisible el recurso; 2) Revocar la resolución recurrida de acuerdo, con los alcances expuestos en el considerando V; 3) Desestimar el restante planteo de la parte actora y confirmar la resolución recurrida en lo demás que decide y ha sido materia de agravios, de acuerdo a lo expuesto en el considerando IV); 4) Costas por su orden.

Regístrese, notifíquese y remítase.

